

**1.7. DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CASTILLA Y LEÓN (pp. 2-
11)**

—

1.7. DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CASTELLA I LLEÓ (pp. 11-19)

IÑIGO SANZ RUBIALES

*Catedrático de Derecho Administrativo (acreditado)/ Catedràtic de Dret Administratiu
(acreditat)*

Universidad de Valladolid

Sumario: 1. Leyes. 1.1. La nueva ley sobre la contaminación lumínica: ¿derecho a ver las estrellas? 1.2. La Ley de Declaración del Parque Natural de Guadarrama. 1.3. La Ley de Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central: el último trámite para la aprobación de las futuras pistas de esquí de San Glorio. 2. Disposiciones reglamentarias. 2.1. El Plan Regional de la Bioenergía: la utilización energética de la biomasa como medio de estabilización de emisiones de gases de efecto invernadero. 2.2. El procedimiento de evaluación de impacto en la Red Natura 2000: el llamado Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura. 2.3. Atribución de funciones sobre el Parque Nacional de los Picos de Europa a la Consejería de Medio Ambiente: el complemento de las funciones del nuevo Consorcio Interautonómico. 2.4. Regulación de subvenciones para la explotación de depuradoras en espacios naturales. 2.5. Actualización del importe de sanciones e indemnizaciones de especies acuáticas previstas en la Ley de Pesca.

1. Leyes

Aunque publicadas en el mes de diciembre del año pasado, tenemos que aludir necesariamente a dos importantes leyes autonómicas dictadas en materia ambiental; la primera es la Ley de Contaminación Lumínica (Ley 15/2010, de 10 de diciembre), una de las primeras que sobre este problema se dictan en España; la otra es la Ley 18/2010, de 20 de diciembre, de Declaración del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama, un espacio natural de gran extensión y muy “humanizado”. Además de estas dos, hay que mencionar la Ley 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León, cuya incidencia ambiental es evidente, por cuanto constituye el último paso antes de tramitar el proyecto de la futura estación de esquí de San Glorio.

1.1. La nueva ley sobre la contaminación lumínica: ¿derecho a ver las estrellas?

La Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación, se sitúa en la línea marcada por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica, cuya DA 4.^a dejaba en manos de las administraciones públicas competentes la promoción de la prevención y reducción de la contaminación lumínica definida por dicha Ley en su artículo 3 f).

La nueva ley autonómica pretende, por una parte, proteger a determinadas especies frente a la luminosidad de los núcleos de población (especialmente, de las grandes ciudades), que puede incidir en sus movimientos migratorios o en su régimen de descanso. Por otra, busca potenciar la eficiencia energética, es decir, el aprovechamiento de la energía de forma que se consuma lo estrictamente indispensable en la iluminación pública.

Para lograr sus fines, la Ley acude a técnicas jurídico-públicas características del ordenamiento ambiental; entre ellas, la zonificación, que permite distinguir cuatro tipos de zonas por razón de la luminosidad permitida (desde las zonas E1, que gozan de una protección especial frente a la luz artificial, hasta las E4, que admiten luminosidad elevada).

La Ley contiene un completo régimen sancionador, peculiar, que prevé —ante una determinada infracción— la posibilidad de no iniciar el correspondiente procedimiento sancionador si el sujeto infractor atiende al requerimiento administrativo y ajusta su actividad a la Ley.

Además, la Ley en bastante medida se dirige a los entes públicos, en especial a los entes locales, que deben cumplir en la iluminación urbana las limitaciones legales y que deben establecer horarios razonables de alumbrado público.

En todo caso, el período transitorio máximo para la adecuación a las previsiones legales es de diez años.

1.2. La Ley de Declaración del Parque Natural de Guadarrama

La Ley 18/2010, de 20 de diciembre (BOCYL de 21 de diciembre), de Declaración del Parque Natural “Sierra Norte de Guadarrama” (Segovia y Ávila) se dicta tras el transcurso de varios meses desde la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales por el Decreto 4/2010, de 14 de enero (BOCYL núm. 12, de 20 de enero de 2010).

El extenso espacio natural declarado por ley regional (83.620 ha) incluye un territorio fuertemente humanizado y atravesado por importantes infraestructuras de transportes, que incluye incluso la capital segoviana, aunque no su casco urbano. Responde, fundamentalmente, a la existencia de importantes valores ambientales, que han subsistido a pesar de que el entorno no sea el más propicio para ello; y cumple, además, una importante función de atenuación de los posibles impactos sobre los pinares de Valsain, cuya riqueza faunística y vegetal es excepcional

1.3. La Ley de Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central: el último trámite para la aprobación de las futuras pistas de esquí de San Glorio

Las directrices de ordenación de ámbito subregional del territorio son instrumentos normativos reconocidos en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Las relativas a la Montaña Cantábrica Central (aprobadas por la Ley 4/2011, de 29 de marzo) tienen un importante contenido ambiental, motivado, en buena medida, por los extraordinarios valores ambientales de la zona, incluida casi toda ella en el espacio natural protegido de Fuentes Carrionas, uno de los escasos núcleos de población estable de especies en peligro de extinción como el oso pardo cantábrico y el urogallo. Como señala la exposición de motivos de la Ley: “El ámbito de estas Directrices engloba un total de 50 municipios y 405 núcleos de población de las provincias de León y Palencia, que ocupan una superficie de 4.825 km², con una baja densidad demográfica, ya que en el ámbito se concentran tan solo 53.481 habitantes, resultando una densidad de población de 11,08 habitantes por km². Se trata, en consecuencia, de un ámbito con coherencia tanto por su identificación espacial como por sus características, pues se extiende por un territorio eminentemente rural, básicamente de montaña pues casi el 87% de su superficie supera los 1.000 m de altitud, comprendiendo el macizo oriental leonés, la vertiente sur del macizo central y la montaña palentina. Es un área con una posición periférica en la Comunidad de Castilla y León y de accesibilidad desigual, en la que destacan sus altos valores naturales, culturales y patrimoniales”.

Aunque no se configuran como una norma ambiental sino de ordenación del territorio, es, sin embargo, evidente su incidencia no solo sobre el urbanismo sensu stricto, sino también sobre la regulación de actividades con incidencia ambiental. El objetivo — extraído de la exposición de motivos— es “potenciar la dinamización social y económica”, pero —de conformidad con el valor de sus elementos naturales— busca “un modelo territorial equilibrado espacial y socialmente, desde estrategias de desarrollo sostenible y de utilización racional de los recursos”.

La Ley 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León, es el último paso en la eliminación de obstáculos para la aprobación de una pista de esquí alpino en el puerto de San Glorio. Como ya señalábamos el año pasado, en 2010 se dictó la Ley de convalidación del PORN del espacio natural de Fuentes Carrionas (Ley 5/2010, de

28 de mayo, de modificación de la Ley 4/2000, de 27 de junio —BOCYL de 2 de junio—, de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina —Palencia—, que trae su causa de la anulación judicial del PORN y que eleva el rango de los preceptos anulados del PORN mediante su aprobación por norma con rango de ley).

Efectivamente, tras la ley convalidante únicamente faltaba la aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional para que previesen el posible uso deportivo de la zona. Así se constata en el núm. 2.2.7 de la memoria, relativo al eje Esla-Riaño, que señala:

“Las potencialidades del área pasan por sus altos valores naturales, como el pantano de Riaño, sus paisajes o el área de *San Glorio*, aprovechables para la implantación de actividades acuáticas o *de deportes de invierno en el puerto de montaña [...]*”.

Nótese que en ningún momento se alude explícitamente a la estación de esquí alpino del puerto de San Glorio, pero se prevé su instalación sin lugar a dudas. De hecho, el artículo 73 de la Ley, relativo a los deportes de invierno, sí que muestra a las claras la política de potenciación de este tipo de instalaciones, como se pone de manifiesto en el propio texto: “1. Los deportes de invierno constituyen una oferta turística singular y con gran capacidad de generar actividad económica y empleo, por lo que *debe planificarse un aprovechamiento integral del recurso «nieve» [...]*”. Tras señalar la necesidad de planificación, a continuación declara de interés público las instalaciones aptas para estos deportes y sus zonas residenciales anejas: “3. Por su capacidad de invertir el proceso de pérdida de pulso socioeconómico, *se considera de interés público —y estas Directrices asumen como una posibilidad estratégica para el ámbito de la Montaña Cantábrica Central— el desarrollo de instalaciones, construcciones e infraestructuras asociadas a la creación y desarrollo de mayor oferta asociada a este tipo de deportes*”.

Aunque el párrafo siguiente establece limitaciones de carácter ambiental para las instalaciones que se vayan a establecer, es evidente que la potenciación de estos núcleos lúdico-deportivos y residenciales constituye una prioridad de la Comunidad Autónoma, a pesar de las fuertes críticas que ha recibido este proyecto desde las organizaciones ecologistas.

Para terminar, es preciso aludir a una peculiaridad de estas directrices: llama la atención que se hayan aprobado por ley, cuando el instrumento ordinario de aprobación es el

decreto de la Junta de Castilla y León (artículo 18.5 de la Ley de Ordenación del Territorio). Ahora bien, no hay inconveniente en que se aprueben por ley cuando se trate de directrices de ámbito subregional “de excepcional relevancia”. Para la Junta, esta excepcional relevancia resulta del propio ámbito territorial y de sus peculiaridades. Pero cabría plantearse si la aprobación por ley no busca más bien elevar el rango formal de las Directrices para evitar, en su caso, impugnaciones judiciales que pudiesen dar al traste con el proyecto de esquí de San Glorio o al menos obstaculizarlo, tal y como ha ocurrido ya con la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas, como se puso de manifiesto al convalidar dicha modificación por ley (véanse los comentarios a la Ley de Convalidación en el número anterior de la revista).

2. Disposiciones reglamentarias

Además de las citadas normas con rango de ley, la Junta de Castilla y León ha adoptado en estos meses varios decretos de importancia ambiental que desarrollan la legislación preexistente en diversos sectores.

2.1. El Plan Regional de la Bioenergía: la utilización energética de la biomasa como medio de estabilización de emisiones de gases de efecto invernadero

Nos referiremos ahora al Decreto 2/2011, de 20 de enero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de la Bioenergía de Castilla y León. Este plan sectorial se incluye entre los instrumentos previstos por la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio para ordenar y regular las actividades sectoriales sobre parte de la Comunidad. Deriva de la competencia de las consejerías de Economía y Empleo, de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente, y se dirige, como señala su exposición de motivos, a otorgar el adecuado rango a un conjunto de medidas que deben contribuir a “desarrollar el aprovechamiento energético de la biomasa en Castilla y León”, a la vista de la necesidad de “reducción de los gases de efecto invernadero, el avance en la gestión de residuos, el empleo del gran potencial de biomasa de esta Comunidad y la búsqueda de alternativas a los cultivos tradicionales”.

Aunque este plan constituía una necesidad elemental de ordenación de las fuentes de energía renovable en nuestra región, es cierto que debería centrar su atención en la biomasa de segunda y tercera generación, y no en la de primera generación, que es la

aludida cuando se refiere a las “alternativas a los cultivos tradicionales”. El horizonte del Plan se fija en el año 2020, lo que va a potenciar la lucha para alcanzar los objetivos establecidos por la propia Unión Europea para esas mismas fechas: un 20% de energía primaria renovable en Europa y un 20% menos de gases de efecto invernadero que en 1990.

En todo caso, este plan tiene naturaleza reglamentaria, lo que viene confirmado no solo por su aprobación mediante decreto de la Junta, sino también por la competencia de desarrollo normativo que se ha atribuido a la Consejería competente en materia de energía (disposición final 1.^a). Todo ello, sin perjuicio del carácter indicativo del Plan, por cuanto marca el camino por donde deberían ir tanto la regulación pública como la iniciativa privada, siempre en el marco de la normativa obligatoria europea y básica estatal.

2.2. El procedimiento de evaluación de impacto en la Red Natura 2000: el llamado Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura

Extraordinaria importancia tiene el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Este procedimiento, que enlaza con las previsiones de la Directiva Hábitats, creadora de la Red Natura 2000, viene a desarrollar la obligación de evaluar las consecuencias que la ejecución de cualesquiera planes y proyectos pueda tener, directa o indirectamente, para los territorios de dicha Red. En concreto, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se remite, para la regulación de dicha evaluación, a la normativa básica y de desarrollo autonómica (art. 45.4). En virtud de esta (de la potestad para dictar “normas adicionales de protección”), la Junta de Castilla y León ha dictado este reglamento regulador del procedimiento.

La razón última de esta regulación está en facilitar la obtención de fondos de la Unión Europea, cuya regulación establece la obligatoriedad de la expedición del “certificado de compatibilidad” de todas las actuaciones financiadas por dichos fondos con la Red Natura 2000. Se trata de un documento en el que la autoridad responsable de la Red

declara la inexistencia de afectaciones a la integridad de los lugares de la Red, de forma que se elimina una traba para la aprobación del plan o proyecto financiable, en su caso.

La evaluación cuyo procedimiento se regula en este decreto se concreta en la emisión del IRNA (Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000, artículo 5). Este informe se incluye, en su caso, en la evaluación estratégica de planes y programas, como un trámite más en su elaboración (art. 8), trámite que se concreta en la emisión del citado IRNA (art. 10); igualmente se prevé cuando el proyecto en cuestión esté sometido a evaluación de impacto ambiental: el estudio de impacto deberá contener un apartado específico relativo a las repercusiones del proyecto sobre los lugares Natura 2000 (art. 14), y de acuerdo con ello la Dirección General competente de la Consejería de Medio Ambiente emitirá el IRNA (art. 15), cuyo contenido deberá incluirse, lógicamente, en la Declaración de Impacto Ambiental (art. 16). Se prevé igualmente la emisión del IRNA cuando se trate de actividades sometidas a autorización o licencia ambiental (arts. 17 y ss.) o a otros tipos de autorización o licencia (art. 21).

En todo caso, el IRNA se configura como un trámite preceptivo en la tramitación administrativa de los proyectos que puedan afectar a los lugares de la Red Natura 2000; los plazos para la resolución del procedimiento quedarán suspendidos mientras no se emita el informe, porque se trata de un “informe determinante” (art. 83.3 de la Ley 30/1992) y su omisión en el correspondiente expediente no implica en modo alguno la inexistencia de afectaciones (art. 22).

2.3. Atribución de funciones sobre el Parque Nacional de los Picos de Europa a la Consejería de Medio Ambiente: el complemento de las funciones del nuevo Consorcio Interautonómico

A continuación voy a referirme al Decreto 10/2011, de 17 de marzo, de atribución de funciones en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional de los Picos de Europa) a la Consejería de Medio Ambiente. Poco antes de terminar el año pasado, el Decreto 63/2010, de 30 de diciembre (publicado en el BOCYL del último día del año), aprobó en Castilla y León los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación y del Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa. El Consorcio, constituido por las comunidades autónomas involucradas —la nuestra, además de Cantabria y Asturias— y por la propia

Administración del Estado, se configura como ente público de base asociativa y fines especiales (art. 15). Se creó con carácter obligatorio en aplicación del artículo 16.3 de la Ley de Parques Nacionales, que exige una fórmula de colaboración interautonómica para llevar a cabo la gestión integrada. El Decreto en cuestión reconocía, en su artículo 20, capacidad de obrar (pero no potestades públicas, salvo la relativa a la concesión de subvenciones) al Consorcio, “sin perjuicio de las facultades que legalmente se reservan las Administraciones consorciadas”. Pues bien, el Decreto de 17 de marzo viene a atribuir a la Consejería de Medio Ambiente las funciones y los servicios traspasados por el Real Decreto 1742/2010, de 23 de diciembre, por el que se ampliaron las funciones y los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad de Castilla y León en materia de conservación de la naturaleza y con referencia al Parque Nacional. De acuerdo con lo previsto por el Decreto 10/2011, va a ser la Consejería de Medio Ambiente la que disponga de las potestades públicas incluidas en los conceptos de “administración y gestión ordinaria y habitual del Parque [...], que ejercerá de forma integrada con las Comunidades Autónomas de Cantabria y del Principado de Asturias” (anexo B del Real Decreto 1742/2010).

2.4. Regulación de subvenciones para la explotación de depuradoras en espacios naturales

Este apartado voy a dedicarlo al Decreto 11/2011, de 17 de marzo, por el que se regulan las condiciones de las subvenciones destinadas a explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales integradas en sistemas de depuración de espacios naturales. Este decreto se dirige explícitamente a la subvención de estaciones depuradoras de aguas residuales ubicadas en espacios protegidos. Es conocido que corresponden a los municipios las competencias en materia de abastecimiento y saneamiento de las aguas residuales, competencias que incluyen también la ejecución y explotación de las correspondientes depuradoras. Sin embargo, por una parte, los municipios ubicados en espacios protegidos no suelen tener la capacidad de gestión suficiente para responsabilizarse de la gestión de este tipo de infraestructuras, y, por otra, carecen de la capacidad económica suficiente para ello. No hay que olvidar que la depuración de aguas es especialmente importante en estos ámbitos territoriales, por la protección ambiental más intensa que reciben.

Es, por lo tanto, el carácter singular de los espacios naturales el que ha llevado a la Administración autonómica a la adopción de acuerdos con los municipios afectados por los que asume el 50% de la financiación, mientras que las entidades locales afectadas se hacen cargo de la otra mitad (art. 1). Este porcentaje se mantiene sea cual sea el modo de gestión de las infraestructuras de depuración, tanto si la entidad local opta por la gestión directa como si la encomienda a la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente (art. 2). En este último caso, la encomienda de gestión opera mediante un convenio entre ambas entidades.

2.5. Actualización del importe de sanciones e indemnizaciones de especies acuáticas previstas en la Ley de Pesca

El Decreto 17/2011, de 14 de abril, actualiza los importes de las sanciones y el valor de las especies acuáticas, para el cálculo de las indemnizaciones, previstos en la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en Castilla y León.

La Ley autonómica de Pesca prevé (art. 62 y anexo III) la actualización anual de dichos importes mediante su adecuación al índice de precios al consumo (IPC). Este decreto deroga el anterior 31/2009, de 30 de abril, y viene a dar cumplimiento a estas previsiones y plasma los incrementos del IPC de 2009 (0,8) y de 2010 (3,0) conjuntamente.

Sumari: 1. Lleis. 1.1. La nova Llei sobre contaminació lumínica: dret a veure els estels? 1.2. La llei de declaració del parc natural de Guadarrama. 1.3. La Llei de Directrius d'Ordenació de la Montaña Cantábrica Central: l'últim tràmit per aprovar les futures pistes d'esquí de San Glorio. 2. Disposicions reglamentàries. 2.1. El Pla Regional de la Bioenergia: la utilització energètica de la biomassa com a mitjà per estabilitzar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. 2.2. El procediment d'avaluació d'impacte a Xarxa Natura 2000: l'anomenat "Informe d'avaluació de repercussions sobre Xarxa Natura". 2.3. Atribució de funcions a la Conselleria de Medi Ambient sobre el parc nacional dels Picos de Europa: el complement de les funcions del nou Consorci Interautonòmic. 2.4. La regulació de subvencions per explotar depuradores en espais naturals. 2.5. L'actualització de l'import de sancions i indemnitzacions d'espècies aquàtiques previstes en la llei de pesca.

1. Lleis

Tot i que es van publicar al mes de desembre de l'any passat, hem d'al·ludir necessàriament a dos lleis autonòmiques importants que es van dictar en matèria ambiental; la primera és la llei de contaminació lumínica (Llei 15/2010, de 10 de desembre), una de les primeres sobre aquest problema que es dicten a Espanya; l'altra és la Llei 18/2010, de 20 de desembre, de declaració del parc natural "Sierra Norte de Guadarrama", un espai natural de gran extensió i molt "humanitzat". A més d'aquestes dues, cal esmentar la Llei 4/2011, de 29 de març, d'aprovació de les directrius d'ordenació d'àmbit subregional de la Montaña Cantábrica Central a Castella i Lleó, la incidència ambiental de la qual és evident, ja que constitueix l'últim pas abans de tramitar el projecte de la futura estació d'esquí de San Glorio.

1.1. La nova Llei sobre contaminació lumínica: dret a veure els estels?

La Llei 15/2010, de 10 de desembre, de prevenció de la contaminació lumínica i del foment de l'eficiència i estalvi energètics derivats d'instal·lacions d'il·luminació, se situa en la línia marcada per la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció atmosfèrica, la DA 4a de la qual deixava en mans de les administracions públiques competents promoure la prevenció i reduir la contaminació lumínica que defineix aquesta llei en l'article 3 f).

La nova llei autonòmica pretén, d'una banda, protegir determinades espècies enfront de la lluminositat dels nuclis de població (especialment de les grans ciutats), que pot incidir en els moviments migratoris o en el règim de descans. De l'altra, busca potenciar l'eficiència energètica, és a dir, l'aprofitament de l'energia de manera que només es consumeixi el que és estrictament indispensable en la il·luminació pública.

Per aconseguir aquests fins, la llei acudeix a tècniques jurídicopúbliques característiques de l'ordenament ambiental: en primer lloc, la zonificació, que permet distingir quatre tipus de zones per raó de la lluminositat permesa (des de les zones E1, que gaudeixen d'una protecció especial enfront de la llum artificial, fins a les E4, que admeten lluminositat elevada).

La llei conté un règim sancionador complet, peculiar, que —davant d'una determinada infracció— preveu la possibilitat de no iniciar el procediment sancionador corresponent si el subjecte infractor atén el requeriment administratiu i ajusta la seva activitat a la llei.

A més, la llei es dirigeix als ens públics en prou mesura, en especial als ens locals, que han de complir les limitacions legals en la il·luminació urbana amb i han d'establir horaris raonables d'enllumenat públic.

En tot cas, el període transitori màxim per adequar-se a les previsions legals és de deu anys.

1.2. La Llei de declaració del parc natural de Guadarrama

La Llei 18/2010, de 20 de desembre (BOCYL del 21), de declaració del parc natural "Sierra Norte de Guadarrama" (Segòvia i Àvila), es va dictar uns quants mesos després que el Decret 4/2010, de 14 de gener (BOCYL n. 12, de 20 de gener de 2010) aprovés el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals.

L'extens espai natural (83.620 ha) declarat per la llei regional inclou un territori fortament humanitzat i amb importants infraestructures de transports, que inclou fins i tot la capital segoviana, encara que no el nucli urbà. Fonamentalment, respon a l'existència d'importants valors ambientals, que han subsistit malgrat que l'entorn no sigui el més propici; compleix, a més, una funció important d'atenuació dels possibles impactes sobre les pinedes de Valsain, la riquesa faunística i vegetal de les quals és excepcional.

1.3. La Llei de Directrius d'Ordenació de la Montaña Cantábrica Central: l'últim tràmit per aprovar les futures pistes d'esquí de San Glorio

Les Directrius d'Ordenació d'Àmbit Subregional del territori són instruments normatius que reconeix la Llei 10/1998, de 5 de desembre, d'ordenació del territori de Castella i

Lleó. Les relatives a la Montaña Cantábrica Central (aprovades per la Llei 4/2011, de 29 de març) tenen un contingut ambiental important, motivat, en gran manera, pels valors ambientals extraordinaris de la zona, inclosa quasi tota en l'espai natural protegit de Fuentes Carrionas, un dels nuclis escassos de població estable d'espècies en perill d'extinció com l'ós bru cantàbric i el gall salvatge. Com assenyala l'exposició de motius de la llei, *“El ámbito de estas Directrices engloba un total de 50 municipios y 405 núcleos de población de las provincias de León y Palencia, que ocupan una superficie de 4.825 Km², con una baja densidad demográfica, ya que en el ámbito se concentran tan solo 53.481 habitantes, resultando una densidad de población de 11,08 habitantes por Km². Se trata, en consecuencia, de un ámbito con coherencia tanto por su identificación espacial como por sus características, pues se extiende por un territorio eminentemente rural, básicamente de montaña pues casi el 87% de su superficie supera los 1.000 m. de altitud, comprendiendo el macizo oriental leonés, la vertiente sur del macizo central y la montaña palentina. Es un área con una posición periférica en la Comunidad de Castilla y León y de accesibilidad desigual, en la que destacan sus altos valores naturales, culturales y patrimoniales”*.

Tot i que no es configuren com una norma ambiental, sinó d'ordenació del territori, tanmateix, n'és evident la incidència, no sols sobre l'urbanisme stricto sensu, sinó sobre la regulació d'activitats amb incidència ambiental. L'objectiu —extret de l'exposició de motius— és *“potenciar la dinamización social y económica”*, però —de conformitat amb el valor dels seus elements naturals— busca *“un modelo territorial equilibrado espacial y socialmente, desde estrategias de desarrollo sostenible y de utilización racional de los recursos”*.

La Llei 4/2011, de 29 de març, d'aprovació de les Directrius d'Ordenació d'Àmbit Subregional de la Montaña Cantábrica Central a Castella i Lleó. Es tracta de l'últim pas en l'eliminació d'obstacles per aprovar la pista d'esquí alpí al port de San Glorio. Com ja assenyalàvem l'any passat, el 2010 es va dictar la llei de convalidació del PORN de l'espai natural de Fuentes Carrionas (Llei 5/2010, de modificació de la Llei 4/2000, de 27 de juny —BOCYL de 2 de juny—, de declaració del parc natural de Fuentes Carrionas i Fuente Cobre-Montaña Palentina —Palència—, que porta la seva causa de l'anul·lació judicial del PORN, i que eleva el rang dels preceptes anul·lats del PORN per mitjà de la seva aprovació per norma amb rang de llei).

Efectivament, després de la llei convalidant, únicament faltava aprovar les Directrius d'Ordenació d'Àmbit Subregional, perquè preveïessin el possible ús esportiu de la zona. Així es constata en el n. 2.2.7. de la Memòria, relatiu a l'eix Esla-Riaño, que assenyala:

“Las potencialidades del área pasan por sus altos valores naturales, como el pantano de Riaño, sus paisajes o el área de San Glorio, aprovechables para la implantación de actividades acuáticas o de deportes de invierno en el puerto de montaña”.

S'ha de tenir en compte que en cap moment s'al·ludeix explícitament a l'estació d'esquí alpí del port de San Glorio, però se'n preveu la instal·lació, sense cap dubte. De fet, l'article 73 de la llei, relatiu als esports d'hivern, mostra clar i català la política de potenciació d'aquest tipus d'instal·lacions, com posa de manifest el mateix text: *“I— Los deportes de invierno constituyen una oferta turística singular y con gran capacidad de generar actividad económica y empleo, por lo que debe planificarse un aprovechamiento integral del recurso «nieve» (...)”.* Després d'assenyalar la necessitat de fer la planificació, a continuació declara d'interès públic les instal·lacions aptes per a aquests esports i les zones residencials annexes: *“3. Por su capacidad de invertir el proceso de pérdida de pulso socioeconómico, se considera de interés público —y estas Directrices asumen como una posibilidad estratégica para el ámbito de la Montaña Cantábrica Central— el desarrollo de instalaciones, construcciones e infraestructuras asociadas a la creación y desarrollo de mayor oferta asociada a este tipo de deportes”.*

Tot i que el paràgraf següent determina limitacions de caràcter ambiental per a les instal·lacions que s'hi han d'establir, és evident que potenciar aquests nuclis ludicoesportius i residencials constitueix una prioritat de la comunitat autònoma, a pesar de les fortes crítiques que ha rebut aquest projecte per part d'organitzacions ecologistes.

Per acabar, cal al·ludir a una peculiaritat d'aquestes directrius: sorprèn que s'hagin aprovat per llei, ja que l'instrument ordinari d'aprovació és el Decret de la Junta de Castella i Lleó (art. 18.5 de la llei d'ordenació del territori). Ara bé, no hi ha cap inconvenient en què s'aprovin per llei quan es tracti de directrius d'àmbit subregional “d'excepteional rellevància”. Per la Junta, aquesta rellevància excepteional resulta del mateix àmbit territorial i de les seves peculiaritats. Però caldria plantejar-se si l'aprovació per llei no busca més aviat elevar el rang formal de les directrius per evitar, si s'escau, impugnacions judicials que puguin malbaratar el projecte d'esquí de San Glorio o almenys obstaculitzar-lo, tal com ha ocorregut amb la modificació del Pla

d'Ordenació de Recursos Naturals de Fuentes Carrionas, com es va posar de manifest en convalidar la modificació per llei (vegeu els comentaris a la llei de convalidació en el número anterior de la REVISTA).

2. Disposicions reglamentàries

A més de les normes amb rang de llei esmentades, la Junta de Castella i Lleó ha adoptat en aquests mesos diversos decrets d'importància ambiental, que despleguen la legislació preexistent en diversos sectors:

2.1. El Pla Regional de la Bioenergia: la utilització energètica de la biomassa com a mitjà per estabilitzar emissions de gasos d'efecte d'hivernacle

Ara ens referirem al Decret 2/2011, de 20 de gener, pel qual s'aprova el Pla Regional d'Àmbit Sectorial de la Bioenergia de Castella i Lleó. Aquest Pla Sectorial s'inclou entre els instruments que preveu la Llei 10/1998, de 5 de desembre, d'ordenació del territori per ordenar i regular les activitats sectorials en una part de la comunitat. Deriva de la competència de les conselleries d'Economia i Ocupació, d'Agricultura i Ramaderia i de Medi Ambient, i, com assenyala l'exposició de motius, atorga el rang adequat al conjunt de mesures que han de contribuir a "*desarrollar el aprovechamiento energético de la biomasa en Castilla y León*", a la vista de la necessitat de "*reducción de los gases de efecto invernadero, el avance en la gestión de residuos, el empleo del gran potencial de biomasa de esta Comunidad y la búsqueda de alternativas a los cultivos tradicionales*".

Tot i que aquest pla constituïa una necessitat elemental d'ordenar les fonts d'energia renovable a la nostra regió, és cert que hauria de centrar l'atenció en la biomassa de segona i tercera generació, i no en la de primera generació, que és l'al·ludida quan fa referència a les "alternatives als cultius tradicionals". L'horitzó del Pla es fixa el 2020, la qual cosa potencia la lluita per assolir els objectius que ha establert la mateixa Unió Europea per a aquesta data: un 20% d'energia primària renovable a Europa i un 20% menys de gasos d'efecte d'hivernacle que el 1990.

En tot cas, aquest pla té naturalesa reglamentària, cosa que confirmen no sols la seva aprovació mitjançant el decret de la Junta, sinó també la competència de desplegament

normatiu que s'ha atribuït a la conselleria competent en matèria d'energia (disposició final 1a). Tot això, deixant de banda el caràcter indicatiu del Pla, en la mesura que marca el camí per on haurien d'anar tant la regulació pública com la iniciativa privada, sempre en el marc de la normativa obligatòria europea i bàsica estatal.

2.2. El procediment d'avaluació d'impacte a Xarxa Natura 2000: l'anomenat "Informe d'avaluació de repercussions sobre Xarxa Natura"

El Decret 6/2011, de 10 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'avaluació de les repercussions dels plans, programes o projectes en l'àmbit territorial de la Comunitat de Castella i Lleó sobre Xarxa Natura 2000, té una importància extraordinària. Aquest procediment, que enllaça amb les previsions de la directiva hàbitats, creadora de Xarxa Natura 2000, desenvolupa l'obligació d'avaluar les conseqüències que pugui tenir, directament o indirectament, l'execució de qualsevol pla i projecte als territoris de la Xarxa. En concret, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni cultural i de biodiversitat, es remet a la normativa bàsica i de desplegament autonòmica per regular l'avaluació esmentada (art. 45.4), en virtut de la qual (de la potestat per dictar "normes addicionals de protecció"), la Junta de Castella i Lleó ha dictat aquest reglament regulador del procediment.

La raó última d'aquesta regulació està a facilitar l'obtenció de fons de la Unió Europea, la regulació de la qual estableix l'obligatorietat d'expedir el "certificat de compatibilitat" de totes les actuacions finançades pels fons esmentats amb la Xarxa Natura 2000. Es tracta d'un document en què l'autoritat responsable de la Xarxa declara que no hi ha afeccions a la integritat dels llocs de la Xarxa, de manera que s'elimini una trava per aprovar el pla o projecte finançable, si s'escau.

L'avaluació el procediment de la qual es regula en aquest decret es concreta en l'emissió de l'IRNA (Informe d'avaluació de repercussions sobre Xarxa Natura 2000, art. 5). Aquest informe s'inclou, si escau, en l'Avaluació estratègica de plans i programes, com un tràmit més en la seva elaboració (art. 8), tràmit que es concreta en l'emissió de l'IRNA (art. 10); igualment es preveu quan el projecte en qüestió està sotmès a avaluació d'impacte ambiental: l'estudi d'impacte ha de preveure un apartat específic relatiu a les repercussions del projecte sobre els llocs Natura 2000 (art. 14) i, d'acord amb això, la direcció general competent de la Conselleria de Medi Ambient

(art. 15) ha d'emetre l'IRNA, el contingut del qual, lògicament, s'ha d'incloure en la declaració d'impacte ambiental (art. 16). Es preveu igualment que s'emeti l'IRNA quan es tracta d'activitats sotmeses a autorització o llicència ambiental (art. 17 i ss.) o a altres tipus d'autorització o llicència (art. 21).

En tot cas, l'IRNA es configura com un tràmit preceptiu en la tramitació administrativa dels projectes que puguin afectar els llocs de la Xarxa Natura 2000; els terminis per resoldre el procediment se suspelen mentre no s'emeti l'informe, perquè es tracta d'un "informe determinant" (art. 83.3 Llei 30/1992) i l'omissió del qual en l'expedient corresponent no implica de cap manera que no hi hagi afeccions (art. 22).

2.3. Atribució de funcions a la Conselleria de Medi Ambient sobre el parc nacional dels Picos de Europa: el complement de les funcions del nou Consorci Interautonòmic

A continuació, em referiré al Decret 10/2011, de 17 de març, d'atribució de funcions a la Conselleria de Medi Ambient en matèria de conservació de la natura (parc nacional dels Picos de Europa). Poc abans d'acabar l'any passat, el Decret 63/2010, de 30 de desembre, (publicat al BOCYL de l'últim dia de l'any) va aprovar els Estatuts reguladors dels òrgans de gestió i participació i del Consorci Interautonòmic per a la Gestió Coordinada del Parc Nacional dels Picos de Europa, a Castella i Lleó. El consorci, constituït per les comunitats autònomes involucrades —la nostra, a més de Cantàbria i Astúries— i per la mateixa Administració de l'Estat, es configura com a ens públic de base associativa i amb fins especials (art. 15). Es va crear amb caràcter obligatori en aplicació de l'article 16.3 de la llei de parcs nacionals, que exigeix una fórmula de col·laboració interautonòmica per dur a terme la gestió integrada. El Decret en qüestió reconeixia al consorci, en l'article 20, capacitat d'obrar (però no potestats públiques, excepte la relativa a la concessió de subvencions), "*sin perjuicio de las facultades que legalmente se reservan las Administraciones consorciadas*". Doncs bé, el Decret de 17 de març atribueix a la Conselleria de Medi Ambient les funcions i els serveis traspassats pel Reial decret 1742/2010, de 23 de desembre, pel qual es van ampliar les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de conservació de la natura i amb referència al parc nacional. D'acord amb el que preveu el Decret 10/2011, la Conselleria de Medi Ambient és la que disposa de les potestats públiques que inclouen els conceptes

d'“*administración y gestión ordinaria y habitual del Parque*”, “*que ejercerá de forma integrada con las Comunidades Autónomas de Cantabria y del Principado de Asturias*” (annex B del Reial decret 1742/2010).

2.4. Regulació de subvencions per explotar depuradores en espais naturals

Aquest apartat el dedicaré al Decret 11/2011, de 17 de març, pel qual es regulen les condicions de les subvencions destinades a explotar estacions depuradores d'aigües residuals integrades en sistemes de depuració d'espais naturals. Aquest decret es dirigeix explícitament a subvencionar estacions depuradores d'aigües residuals ubicades en espais protegits. No cal dir que les competències en matèria d'abastiment i sanejament d'aigües residuals corresponen als municipis, competències que també inclouen l'execució i l'explotació de les depuradores corresponents. No obstant això, els municipis ubicats en espais protegits no solen tenir la capacitat de gestió suficient per responsabilitzar-se de la gestió d'aquest tipus d'infraestructures; d'altra banda, tampoc no tenen la capacitat econòmica suficient. No cal oblidar que la depuració d'aigües és especialment important en aquests àmbits territorials, perquè la protecció ambiental que reben és més intensa.

Per tant, el caràcter singular dels espais naturals és el que ha portat a l'Administració autonòmica a adoptar acords amb els municipis afectats mitjançant els quals assumeix el 50% del finançament, mentre que les entitats locals afectades es fan càrrec de l'altra meitat (art. 1). Aquest percentatge es manté sigui quin sigui el mode de gestió de les infraestructures de depuració: tant si l'entitat local opta per gestionar-les directament com si encomana la gestió de les depuradores a la Societat Pública de Medi Ambient de Castella i Lleó, que depèn de la Conselleria de Medi Ambient (art. 2). En aquest últim cas, l'encàrrec de gestió opera per mitjà del conveni entre ambdós entitats.

2.5. L'actualització de l'import de sancions i indemnitzacions d'espècies aquàtiques previstes en la llei de pesca

El Decret 17/2011, de 14 d'abril, actualitza els imports de les sancions i del valor de les espècies aquàtiques per calcular les indemnitzacions, previstos en la Llei 6/1992, de 18 de desembre, de protecció dels ecosistemes aquàtics i de regulació de la pesca a Castella i Lleó.

La llei autonòmica de pesca (art. 62 i annex III) preveu l'actualització anual dels imports per mitjà de l'adequació a l'índex de preus al consum (IPC). Aquest decret deroga l'anterior Decret 31/2009, de 30 d'abril, i compleix aquestes previsions i reflecteix els increments de l'IPC de 2009 (0,8) i de 2010 (3,0) conjuntament.